



H. AYUNTAMIENTO  
2024 | 2027



Sindicatura  
Municipal

Oficio de sindicatura: 0702/2025.

Asunto: **se solicita inclusión de tema dentro  
del orden del día de sesión de Ayuntamiento.**

San Luis de la Paz, Guanajuato, a 14 de agosto de 2025.

**M.C.C. Rubén Urías Ruíz.**  
**Presidente Municipal**  
**de San Luis de la Paz, Gto.**  
**Presente.**



**Atención: Lic. José Francisco Mendoza Martínez.**  
**Secretario del Ayuntamiento.**

La que suscribe, Licenciada Leticia González Muñoz, Síndica propietaria del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, con el debido respeto comparezco a efecto de lo siguiente:

De conformidad con lo señalado por los numerales 106 y 107 de la de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato en relación con el artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, a través del presente se solicita el que a la brevedad posible se convoque a sesión de Ayuntamiento en donde se trate el siguiente tema:

- Oficio 9557 suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, y el cual emana dentro del juicio de amparo 137/2025 – VIII – E.

Documento por el cual se requiere al Ayuntamiento para que, dentro del término de 3 días, dé cumplimiento a la sentencia emitida en fecha 05 de junio de 2025; sentencia por la que con respecto al Cabildo se determinó:





H. AYUNTAMIENTO  
2024 | 2027



Sindicatura  
Municipal

*"Con plenitud de decisión, emita el acuerdo correspondiente respecto al reconocimiento de Abigail Torres Hernández como autoridad auxiliar del órgano municipal, en representación de la comunidad Misión de Chichimecas, de San Luis de la Paz, Guanajuato, de conformidad con el artículo 125 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato."*

Cumplimiento que debe darse bajo el apercibimiento que de no hacerse dentro del plazo indicado, se impondrá una multa correspondiente a 100 unidades de medida y actualización; esto aunado a que con independencia de lo anterior, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede concluir con la separación del puesto y consignación.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracciones I, y VI, y 137 fracción I de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 23 fracciones VI y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas, quedando como su atenta y segura servidora.

Atentamente.

Lic. Leticia González Muñoz.



Síndica del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato.



SECCIÓN AMPARO  
JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E



OFICIO	AUTORIDAD FEDERAL
9555	MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUADA. REFERENCIA: A.R.A. 490/2025
AUTORIDAD RESPONSABLE	
9556	DIRECTOR DEL CENTRO COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PAZ, GUANAJUATO.
9557	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.
9558	PRESIEDNTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

EN EL JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E, PROMOVIDO POR ABRAHAM TORRES HERNÁNDEZ, EN ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

"...Guanajuato, Guanajuato, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

1. Tribunal Colegiado informa que causó estado auto que desechó el recurso de revisión.

Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que causó estado el proveído que desechó el recurso de revisión 490/2025.

Asimismo, devuelve el juicio 137/2025 del propio índice.

Acúsese recibo y glósese a los autos del expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes respectivo (a excepción de las copias certificadas que lo integran, respecto de las cuales se ordena su destrucción).

2. Anotaciones.

Háganse las anotaciones en los libros de control de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

3. Primer requerimiento para cumplir con el fallo protector.

Con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, para que dé cumplimiento con la ejecutoria de que se trata, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito copia certificada de las actuaciones que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo dentro del plazo indicado, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se le impondrá una multa correspondiente a cien unidades de medida y actualización.

Con independencia de la multa impuesta se remitirá el expediente al Tribunal



Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede concluir con la separación de su puesto y su consignación.

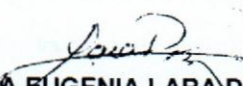
Asimismo, en su caso, se procederá a requerir a su superior jerárquico, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos señalados por los ordinales 192, tercer párrafo y 194 de la Ley de Amparo.

**Notifíquese.**

Así lo proveyó y firma **Luis Alfredo Gómez Canchola**, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de **Laura Eugenia Lara Díaz**, Secretaria que autoriza y da fe. **FIRMAS. RÚBRICAS.**

**LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS  
LEGALES CONDUCENTES.**

**ATENTAMENTE**  
**GUANAJUATO, GUANAJUATO, A 08 DE AGOSTO DE 2025.**  
*"2025. Año de la Mujer Indígena"*

  
**LAURA EUGENIA LARA DÍAZ**  
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE  
DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA 55

JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E

19.

SENTENCIA

**JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO**  
CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO-SILAO, GLORIETA SANTA FE NO. 5, EDIFICIO  
A, 1ER. PISO COL. YERBABUENA GUANAJUATO, GTO.  
Correo Institucional: [1jdo16cto@correo.cjf.gob.mx](mailto:1jdo16cto@correo.cjf.gob.mx)

**SECCIÓN AMPARO**  
**JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E**

OFICIOS	AUTORIDADES RESPONSABLES
6507	DIRECTOR DEL CENTRO COORDINADOR DE PUEBLOS INDÍGENAS DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
6508	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.
6509	PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO.

POR VÍA DE NOTIFICACIÓN, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES, CON EL PRESENTE REMITO A USTED COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EL DÍA DE HOY EN EL JUICIO DE AMPARO **137/2025-VIII-E**, PROMOVIDO POR ABIGAIL TORRES HERNÁNDEZ.

"... VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 137/2025-VIII-E.

**RESULTANDO**

**PRIMERO. Contenido de la demanda de amparo.**

Mediante escrito depositado el veintitrés de enero de dos mil veinticinco (foja 1), en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, Abigail Torres Hernández promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por el acto que enseguida se precisan:

**Autoridades responsables:**

1. Director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de San Luis de la Paz, Guanajuato, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
2. Ayuntamiento del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
3. Presidente del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

**Acto reclamado:**

"De las Autoridades Ordenadoras, el H. Ayuntamiento, del municipio de San Luis de la Paz Gto., y del Director del centro coordinador de pueblos indígenas, reclamo el reconocimiento de un derecho que como pueblos indígenas tenemos para regirnos por nuestros usos y costumbres PARA NOMBRAR A NUESTRAS AUTORIDADES TRADICIONALES (delegado de la comunidad)." -SIC-

**SEGUNDO. Trámite de la demanda.**

La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, que por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, la radicó bajo el número de expediente 137/2025-VIII, y previno a la promovente para que indicara con puntualidad cuál era el acto que reclamaba en la presente instancia constitucional y aclarara los efectos para los que solicitaba la suspensión (fojas 8 a 11).

## AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

Por escrito presentado el cuatro de febrero siguiente (foja 12), la parte quejosa indicó que el acto reclamado consistía en:

*"[...] el reconocimiento por parte de las autoridades responsables y ejecutoras al nombramiento que se me otorgo por el pleno de la comunidad como autoridad tradicional (Delegada de la Comunidad) de la comunidad de Misión de Chichimecas, del municipio San Luis de la Paz, Guanajuato, de acuerdo a los usos y costumbres que como pueblos indígenas tenemos de nuestra propia comunidad.*

*De igual manera he de manifestar que las autoridades responsables no han emitido ningún acuerdo ni tampoco un nombramiento para la suscrita como se debe reconocer para poder ejercitar las funciones de autoridad tradicional (Delegada de la Comunidad)." -SIC-*

Por lo que, previa ratificación de la firma estampada en el escrito de cumplimiento a la prevención, la demanda de mérito se admitió a trámite el doce de febrero de este año (fojas 16 y 17); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que luego de diversos diferimientos, se celebró en los términos del acta que antecede; y,

## CONSIDERANDO:

## PRIMERO. Competencia.

Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I; y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo, así como 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito; lo anterior, toda vez que los efectos del acto reclamado se materializan en San Luis de la Paz, Guanajuato, en donde este juzgado ejerce jurisdicción.

## SEGUNDO. Fijación del acto reclamado.

En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toma en consideración la demanda de amparo y toda la información que obra en el expediente.

Así, se tiene que el acto reclamado es esta vía constitucional consiste en:

↓ La omisión de acordar lo relativo al reconocimiento de la aquí quejosa como **autoridad auxiliar** del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, en representación de la comunidad Misión de Chichimecas.

## TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable identificada con el numeral 1.

No es cierto el acto reclamado al **Director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de San Luis de la Paz, Guanajuato**, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues así lo manifestó su apoderada legal al rendir su informe con justificación, sin que la parte quejosa haya desvirtuado su negativa, con alguna prueba en contrario, ni se puso manifiesto un indicio que patentice la existencia de dicho acto.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 55

JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E

21

SENTENCIA

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 290, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 391180, intitulada:

**"INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOMA EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.** No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."

En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no desvirtuó el contenido negativo del informe justificado rendido por la autoridad responsable, lo procedente es **sobreseer en el presente juicio de amparo**, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice:

**"Artículo 63.** El Sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...]

IV. De la constancias de autos **apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional**".

En apoyo del anterior criterio, es de invocarse la tesis número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor:

**"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.** Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".

**CUARTO. Certeza del acto atribuido a las autoridades responsables identificadas con los progresivos 2 y 3.**

Es cierto el acto reclamado al **Presidente y al Ayuntamiento** de San Luis de la Paz, Guanajuato, pues a pesar de que negaron su existencia, su negativa se ve desvirtuada con las documentales que allegó la parte quejosa al presente juicio constitucional.

Para sustentar tal afirmación, conviene traer a cuenta los antecedentes de mayor relevancia en el caso que nos ocupa.

**ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.**

1. El trece de mayo de dos mil veinticuatro, tuvo verificativo la asamblea para la elección de nueva autoridad tradicional del Pueblo Originario Eza'r Indomable de Misión de Chichimecas, en la que resultaron vencedores Abigail Torres Hernández y José Luis Mata Mata (*información que se obtiene de los antecedentes del dictamen que obra a fojas 88 a 93 del tomo de prueba*).

2. El quince de mayo siguiente, Abigail Torres Hernández y Ulises Mata Mata tomaron protesta como autoridad tradicional y apoyo a la autoridad tradicional, respectivamente, de la comunidad Misión de Chichimecas, de San Luis de la Paz, Guanajuato (*tomo de prueba, foja 1*).

Sin embargo, en esa misma data, Ulises Mata Mata renunció al cargo que le fue otorgado (*ibidem, foja 2*).

3. Mediante oficios 0001/SP/MC/2024, de diez de junio de dos mil veinticuatro, Abigail



## AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

Torres Hernández comunicó al Presidente municipal y al Director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, ambos de San Luis de la Paz, Guanajuato, su reconocimiento y nombramiento como nueva representante y autoridad tradicional de la Comunidad Indígena Misión de Chichimecas (*ibidem*, fojas 13 y 14).

4. Luego, el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, tuvo verificativo una reunión entre integrantes de la comunidad Misión de Chichimecas y personal del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, entre ellos el Presidente municipal, en la cual, los primeros solicitaron que se reconociera como representante y autoridad auxiliar a Abigail Torres Hernández (*información que se obtiene de los antecedentes del dictamen que obra a fojas 88 a 93 del tomo de prueba*).

Al respecto, destaca que los intervinientes acordaron que:

a) Los integrantes de la referida comunidad harían llegar a la Encargada del Departamento Jurídico, el expediente para su análisis a más tardar el veintiocho de octubre siguiente.

b) Emitido el dictamen correspondiente, el Ayuntamiento daría respuesta a su petición.

5. Ante ese escenario, mediante oficio 0194PMC/2024, de dos de diciembre de dos mil veinticuatro (*ibidem*, foja 87), el Presidente de San Luis de la Paz, Guanajuato, notificó a los integrantes de la citada comunidad el Dictamen relacionado con su representante indígena (*ibidem*, fojas 88 a 93), del cual se advierte que, la Encargada de Jurídico y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento concluyó lo siguiente:

*\*6. En atención a lo expuesto, lo procedente es, que debido al desconocimiento que la Asamblea del Pueblo Originario EZA'R de Misión de Chichimecas hace del C. Juan Daniel García Torres como Autoridad Tradicional y Autoridad Auxiliar como consecuencia queda sin efecto el reconocimiento que el Ayuntamiento 2021-2024 hizo de este como Autoridad Auxiliar y se le debe requerir la entrega del sello por la Autoridad correspondiente, asimismo y teniendo como sustento la Acta que se levanta con motivo de la Asamblea del Pueblo Originario EZA'R de Misión de Chichimecas de fecha 13 de mayo de 2024 mediante el cual resulta electa como Autoridad Tradicional y Autoridad Auxiliar la C. ABIGAIL TORRES HERNÁNDEZ, así como la notificación de 10 de junio del 2024 en virtud del cual se hace del conocimiento del Ayuntamiento del nombramiento que nueva Autoridad Tradicional y Autoridad Auxiliar es la C. ABIGAIL TORRES HERNÁNDEZ, razón por la cual y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141-1 de la Ley Orgánica Municipal en vigor en el momento de los hechos en correlación con el artículo 125 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, se debe tener como Autoridad Auxiliar del Ayuntamiento a la C. ABIGAIL TORRES HERNÁNDEZ, razón por la cual en la próxima Sesión del Ayuntamiento se debe de reconocer a la C. ABIGAIL TORRES HERNÁNDEZ como Autoridad Auxiliar del Ayuntamiento de la Comunidad Indígena de Misión de Chichimecas al haber recaído en su persona tanto la figura de Autoridad Tradicional como de Autoridad Auxiliar del Ayuntamiento, en virtud de haber sido electa conforme a sus usos, costumbre y prácticas tradicionales. \* -sic-*

-Lo resaltado es propio-

Circunstancias fácticas que se corroboran con las documentales que la quejosa aportó<sup>7</sup> al juicio de amparo en que se actúa, consistentes en:

a) Copia certificada de la toma de protesta por parte de Abigail Torres Hernández y Ulises Mata Mata, como autoridades del Pueblo Originario Eza'r Indomable de Misión de Chichimecas, de quince de mayo de dos mil veinticuatro.

b) Copia certificada del escrito de quince de mayo de dos mil veinticuatro, signado por José Ulises Mata Mata, a través del cual renunció al cargo que le fue conferido.

c) Acuses de recibo de los oficios dirigidos al Presidente Municipal y al Director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI), ambos de San Luis de la Paz, Guanajuato, por los que se les informó el reconocimiento y nombramiento de Abigail Torres Hernández, como nueva representante y autoridad de la Comunidad Indígena Misión de Chichimecas.

<sup>7</sup> Las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202, 210-A y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A 55

JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E

23

SENTENCIA

d) Dictamen de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emitido por la Encargada de Jurídico y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato.

En ese sentido, se estima que esas probanzas son suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado, dado que, al ser adminiculadas, de su contenido se desprende la calidad de autoridad tradicional de Abigail Torres Hernández de la comunidad Misión de Chichimecas, la obligación de las autoridades responsables de pronunciarse respecto al reconocimiento de la quejosa como autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, en representación del citado núcleo de población indígena, y la abstención en que incurrieron de hacerlo.

**QUINTO. Estudio de causas de improcedencia.**

El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin que se advierta su actualización de oficio, por lo que procede el análisis de la cuestión planteada.

Sin que se soslaye que en el particular, la representante legal del Director del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de San Luis de la Paz, Guanajuato, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, refiere que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXI, de la Ley de Amparo<sup>8</sup>, pues estima que no se violaron los derechos humanos de la quejosa por las razones que expone.

No obstante, como se estableció en el considerando tercero de la presente resolución, el acto reclamado que le fue atribuido se declaró inexistente, y por consiguiente, se sobreesayó en el juicio por cuanto hace a la autoridad responsable que representa, por lo que no sería necesario realizar un pronunciamiento específico al respecto.

Sin embargo y a mayor abundamiento, se desestima la actualización de las causales de improcedencia que invoca, toda vez que, los argumentos que esgrime se apoyan en aspectos que involucran el fondo del asunto, de ahí que será en el apartado correspondiente en donde se analice si con el acto reclamado precisado se vulneran los derechos sustantivos de la parte quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, por la razón jurídica que la sustenta, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187973, de rubro y texto siguientes:

**'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.** Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse'.

**SEXTO. Cuestión previa.**

En el caso particular, debe precisarse que el estudio del acto reclamado se circunscribirá únicamente a la abstención de las autoridades municipales de pronunciarse sobre el reconocimiento o no de la aquí quejosa como autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, en representación de la comunidad Misión de Chichimecas, al ser procedente el juicio de amparo indirecto

<sup>8</sup> Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[...]

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la persona quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

[...]

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]



## AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por tanto, el sentido en que pueda emitir su decisión el Ayuntamiento de dicho municipio escapa del estudio de la *litis* fijada en el presente asunto, al ser una cuestión que no puede ser revisada a través de este medio de control constitucional; por lo que, en caso de ser contraria a su pretensión, tal cuestión deberá dirimirse mediante los procedimientos idóneos y ante las autoridades que la quejosa estime competentes.

**SÉPTIMO. Estudio de fondo.**

La parte quejosa estimó vulnerados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 2º, 14, 16, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, formuló el concepto de violación que consideró pertinente, mismo que se tiene por transcrito en obvio de repeticiones innecesarias, además que en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción.

En atención a la causa de pedir<sup>9</sup>, el concepto de violación hecho valer por la parte peticionaria de amparo es **fundado** y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

Como punto de partida, cabe recordar que en el artículo 8º de la Constitución Federal, está consagrado el derecho de petición, el cual surge como consecuencia de la exigencia jurídica y social de un régimen de legalidad, el que literalmente dispone:

*"Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.*

*A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."*

Del precepto transcrito se advierten los siguientes elementos estructurales:

1. Que se haga una petición;
2. Que le recaiga acuerdo escrito;
3. Que éste se haga saber al peticionario; y,
4. Que la comunicación se realice en breve término.

Así, dicho dispositivo contiene la potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea, cualquier persona moral o física que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual del artículo 8º de la Ley Fundamental; esto es, el gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga por escrito, de una manera pacífica y respetuosa; solicitud la cual deberá ser contestada en breve término por las autoridades ante las cuales se haya elevado.

<sup>9</sup> Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 191384, de rubro y texto: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima la causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo".





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SENTENCIA

Cabe destacar que el hecho de que éstas se encuentren obligadas a dar contestación a una petición formulada por un gobernado, ello no significa que deba ser acordada de conformidad a lo solicitado, ya que tal precepto únicamente conlleva implícito el asegurar un proveído sobre lo que se pide, pero no que se resuelvan las peticiones en determinado sentido.

Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental, al dictar un acuerdo, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido.

Claro está que en un régimen de derecho, como lo es el nuestro, toda resolución de cualquiera autoridad debe estar pronunciada conforme a la ley y, principalmente, de acuerdo con la Constitución, por lo que, si la petición está fundada legal y constitucionalmente, debe ser obsequiada en cuanto a su contenido.

No obstante, en caso de que el acuerdo que recaiga a una instancia sea notoriamente ilegal o no esté fundado en ley, la autoridad que lo dicta no viola el artículo 8° Constitucional, puesto que éste exige simplemente que exista una resolución y no que deba ser dictada legalmente, teniendo el perjudicado expeditos sus derechos para impugnarla como corresponda.

Por cuanto hace a la referencia de que tal acuerdo debe ser dictado dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica que se debe entender por breve término, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado.

Ahora bien, ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse.

Por otra parte, aunque el artículo constitucional a estudio, no indica que el acuerdo que deba recaer a determinada petición, deba tener relación con la misma, también lo es que resulta lógico determinar que éste debe ser congruente, ya que de no hacerlo así, se lesionarían los intereses jurídicos del ocurrente, en virtud de que, atento a lo ordenado por dicho ordenamiento constitucional, las autoridades tienen obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un auto también por escrito, el cual se deberá dar a conocer en breve término.

Otro de los elementos a que hace mención el citado ordenamiento constitucional, es el referente a que la autoridad ante la cual se eleve determinada petición tiene la obligación de hacer del conocimiento del solicitante dicho acuerdo, habida cuenta que de no hacerlo así, no se da cabal cumplimiento a lo ordenado por el multicitado numeral.

Por último, resulta indispensable resaltar que, a efecto de que la autoridad respectiva esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, resulta menester que el gobernado, al formular su petición, señale algún domicilio en el cual se le pueda hacer de su conocimiento el contenido del proveído que recaiga a la misma, pues de no hacerlo, la autoridad estaría imposibilitada para darle a conocer la respuesta dada a la petición; de modo tal que, en el supuesto de que no lo hiciera, la autoridad responsable, en atención a los lineamientos que establezca la ley que rija el acto, deberá efectuar tal notificación.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de contenido literal siguiente:

**"DERECHO DE PETICIÓN. PARA QUE LA AUTORIDAD HAGA SABER EN BREVE TÉRMINO SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO ES NECESARIO QUE SEÑALE DOMICILIO EN SU SOLICITUD RELATIVA. El derecho de petición contenido en el artículo 8° constitucional, se integra por dos fases: 1). Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde en derecho como corresponda; y 2). Que se haga saber al gobernado en breve**



## AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

término el contenido de su resolución; para que se cumpla con esta última fase, es necesario que el peticionario, en su escrito relativo, señale su domicilio, supuesto que de no ser así, la autoridad se encuentra imposibilitada para cumplir con su obligación de hacer saber lo acordado<sup>10</sup>.

En armonía con lo anterior, es importante traer a colación el contenido del artículo 2o, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente:

**"Artículo 2o.** La Nación Mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas.

[...]

**A.** Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

[...]

**X.** Elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política."

Del análisis del artículo de referencia, se aprecia el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a elegir a sus representantes ante los Ayuntamientos de los municipios en que se encuentren asentados, en ejercicio de su libre determinación y autonomía, y en los términos que establezcan las constituciones y leyes estatales para dicho procedimientos.

Respecto a este tópico, al resolver la acción de inconstitucionalidad 56/2014 y su acumulada 60/2014<sup>11</sup>, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que:

*"[...] la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se manifiesta en libertad para decidir sus formas internas de organización política; misma que se traduce en libertad para elegir a sus representantes o autoridades conforme a sus tradiciones y normas internas.*

*De tal manera que puede darse el caso de que los pueblos y comunidades indígenas tengan su asiento en uno o más municipios de uno o más Estados, supuesto en el cual, el pueblo o comunidad indígena ejercerá su autonomía en todo el ámbito geográfico municipal, eligiendo a través de sus sistemas tradicionales a las personas que conformarán el órgano de gobierno municipal; mientras que en aquellos municipios donde sólo exista población indígena, la población o comunidad respectiva podrá elegir mediante esos sistemas, además de sus representantes (políticos) o autoridades al interior de ese núcleo comunitario, a las personas que fungirán como representantes (jurídicos) del propio núcleo ante los ayuntamientos; por su parte, los Estados tienen la obligación de reconocer su representación política, regulando en sus constituciones y leyes los términos en que sus representantes (jurídicos) participarán ante los ayuntamientos."*

-Lo resaltado es propio-

Obligación que se constata del contenido del artículo 10 de la Ley para la protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato<sup>12</sup>, el cual dispone que el estado y los municipios reconocerán a las autoridades indígenas elegidas de acuerdo a sus sistemas, para el ejercicio de sus formas internas de gobierno.

Ahora, en este punto debe traerse a cuenta lo estipulado en el artículo 125 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, que regula la representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en los términos siguientes:

**"Artículo 125.** Tratándose de demarcaciones territoriales en las que se encuentren asentados pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, fungirá como autoridad auxiliar del Ayuntamiento quien sea electo conforme a los usos, costumbres y prácticas tradicionales de cada comunidad, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad.

En ningún caso el Ayuntamiento podrá designar a la persona titular de la comunidad tratándose de demarcaciones territoriales en la que se encuentren asentados pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas.

<sup>10</sup> Emitido por el entonces Único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página, 240, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, Octava Época.

<sup>11</sup> Véase la sesión del dos de octubre de dos mil catorce.

<sup>12</sup> Reconocimiento de las autoridades indígenas

**Artículo 10.** El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas de acuerdo a sus sistemas normativos internos, para el ejercicio de sus formas internas de gobierno; regular y solucionar sus problemas y conflictos, decidir sobre las faenas y en general, sobre todas las actividades de beneficio común.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A 55

JUICIO DE AMPARO 137/2025-VIII-E

27

SENTENCIA

**El Ayuntamiento reconocerá a quien funge como autoridad auxiliar en la sesión inmediata siguiente a la designación.**

*La designación, duración, renuncia y remoción de las autoridades auxiliares reconocidas por los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, se definirá por los propios pueblos conforme a sus usos, costumbres y prácticas tradicionales.*

*Las autoridades auxiliares reconocidas por los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas tendrán las mismas atribuciones de las establecidas para los delegados.*

-Lo resaltado es propio-

Como puede verse, de tal dispositivo se desprende que en las demarcaciones territoriales que cuenten con asentamientos de pueblos y comunidades indígenas afromexicanas, será autoridad auxiliar del municipio aquella persona que sea elegida conforme a los usos, costumbres y prácticas tradicionales de cada núcleo de población. Asimismo, se advierte el imperativo sobre el Ayuntamiento de **reconocer a quien funge como autoridad auxiliar en la sesión inmediata siguiente a la de su designación.**

Establecido el anterior marco normativo, en el caso concreto tenemos que el trece de mayo de dos mil veinticuatro, Abigail Torres Hernández fue electa como representante y autoridad tradicional del Pueblo Originario Eza'r Indomable de Misión de Chichimecas, de San Luis de la Paz, Guanajuato; además que, tomó protesta del cargo conferido el quince de mayo siguiente.

Así, por oficio 0001/SP/MC/2024, de diez de junio de dos mil veinticuatro, la quejosa informó al Presidente de ese municipio su reconocimiento y nombramiento como nueva autoridad tradicional de la citada comunidad.

Debido a lo anterior, el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, integrantes de la comunidad Misión de Chichimecas se reunieron con personal del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, entre ellos el Presidente municipal, para solicitar que se reconociera como autoridad en representación del núcleo de población indígena a Abigail Torres Hernández.

Como resultado de ese encuentro, los habitantes de la comunidad se comprometieron a entregar el expediente para su análisis a más tardar el veintiocho de octubre siguiente, y el Ayuntamiento acordó que una vez que se emitiera el dictamen correspondiente, daría respuesta a su petición.

Ante ese escenario, el veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, la Encargada de Jurídico y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento validó la elección de la aquí quejosa como autoridad tradicional de la comunidad de Misión de Chichimecas, y **determinó que en la siguiente sesión del órgano municipal debería reconocérsele como autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato.**

Por tanto, es inconcuso que las autoridades responsables han trasgredido en perjuicio de la parte quejosa las prerrogativas establecidas en los artículos 2o, apartado A, fracción X, y 8 de la Constitución Federal, puesto que, a la fecha de la presentación de la demanda o al día de hoy en que se resuelve este asunto, **no existe constancia en la que se haga patente la determinación que adoptó el citado órgano municipal respecto al reconocimiento de Abigail Torres Hernández como autoridad auxiliar en representación de la comunidad Misión de Chichimecas, de San Luis de la Paz, Guanajuato.**

Corolario de lo expuesto, al resultar fundado el concepto de violación expresado, **se impone conceder el amparo y la protección constitucional solicitados por la parte quejosa**, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente.

**OCTAVO. Efectos de la concesión.**

## AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para que el **Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato**, dentro del lapso de **TRES DÍAS**, contado a partir de que se le notifique la firmeza de este fallo, proceda en los términos siguientes:

- Con plenitud de decisión, emita el acuerdo correspondiente respecto al reconocimiento de Abigail Torres Hernández como **autoridad auxiliar** del órgano municipal, en representación de la comunidad Misión de Chichimecas, de San Luis de la Paz, Guanajuato, de conformidad con el artículo 125 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo;

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.** Se **sobresee** en el juicio de amparo promovido por Abigail Torres Hernández, en términos del considerando tercero de esta resolución.

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión **ampara y protege** a Abigail Torres Hernández, por las razones y para los efectos precisados en los dos últimos puntos considerativos de la presente sentencia.

**Notifíquese personalmente.**

Así lo sentenció y firma Luis Alfredo Gómez Canchola, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de **Guadalupe Hernández Xolio**, secretaria que autoriza y da fe; hasta hoy **cinco de junio de dos mil veinticinco**, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado."- **FIRMAS. RÚBRICAS.**

**LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.**

**ATENTAMENTE**  
**GUANAJUATO, GUANAJUATO, A 05 DE JUNIO DE 2025.**  
*"2025, Año de la Mujer Indígena"*

**GUADALUPE HERNÁNDEZ XOLIO**  
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE  
DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

